



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Demandante: BEATRIZ ELENA ROJAS RINCÓN
Demandados: ACP COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A.
Radicado: 05001 31 05 003 2018 00836 01
Sentencia: S-038

AUTO

En atención a la escritura pública 3374 del 2 de septiembre de 2019 allegada al expediente, en la que se otorga poder general para representar a la ACP COLPENSIONES a la sociedad MUÑOZ Y ESCRUCERÍA S.A.S., se le reconoce personería como apoderada judicial a la Dra. ELIANA MORENO PEDROZA, T.P. 173.191 del C. S. de la Judicatura.

Se accede además a la sustitución de poder presentada por la referida apoderada, a favor de la Dra. MELANY NIEVES TAMAYO, portador de la T.P. N° 257.033 del C. S. de la Judicatura, a quien se le reconoce personería judicial para actuar en los mismos términos que a la apoderada principal, con efectos desde el momento mismo de la presentación del memorial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a dar trámite al grado jurisdiccional de CONSULTA a favor de la

demandante, con ocasión de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín el día 12 de noviembre de 2020.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES:

BEATRIZ ELENA ROJAS RINCÓN demandó a PROTECCIÓN S.A. y a la ACP COLPENSIONES, pretendiendo se declare la ineficacia de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad -RAIS- por el incumplimiento al deber de información, y, en consecuencia, se DECLARE su derecho a retornar al Régimen de Prima Media con Prestación Definida -RPM- administrado por COLPENSIONES, sin solución de continuidad. Busca además que se ORDENE a PROTECCIÓN S.A. el traslado de los aportes cotizados en el RAIS a COLPENSIONES, para que ésta última proceda con el reconocimiento de la pensión de vejez en los términos del Decreto 758 de 1990, junto con los intereses moratorios o en subsidio la indexación. Pretende consecuentemente el reconocimiento a cargo de COLPENSIONES de la pensión de vejez a partir del 6 de septiembre de 2015 cuando cumplió los 55 años de edad, asumiendo el mayor valor que resulte con respecto de lo que ha estado pagando PROTECCIÓN S.A., así como los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación y las costas del proceso.

LOS HECHOS:

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 6 de septiembre de 1960; que empezó a cotizar al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a partir del 24 de abril de 1979; que en toda su vida laboral alcanzó a completar 1920.43 semanas de cotización; que es

beneficiaria del régimen de transición; que se trasladó a la AFP PROTECCIÓN en el mes de agosto de 1995 cuando un asesor de ese fondo privado le manifestó que allí se podría pensionar cuando quisiera, anticipadamente y con el monto que deseara; que en ese momento no le indicaron los pro y los contra de estar afiliada en uno y otro régimen; que la AFP PROTECCIÓN S.A. le reconoció la pensión de vejez a partir del 19 de septiembre de 2016 en cuantía para ese año de \$984.361; y que de haber permanecido en COLPENSIONES su pensión habría sido reconocida como beneficiaria del régimen de transición y en una cuantía aproximada de \$1'458.000.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:

Al contestar, COLPENSIONES acepta la fecha de nacimiento de la demandante, su afiliación a esa entidad y el posterior traslado a la AFP PROTECCIÓN S.A., indicando frente a lo demás que no le consta por tratarse de situaciones ajenas a su conocimiento. Se opuso además a las pretensiones y como excepciones de fondo propuso las que denominó inexistencia de la obligación de traslado de régimen, prescripción, buena fe e improcedencia de condena en costas.

PROTECCIÓN S.A. acepta igualmente la fecha de nacimiento de la demandante, la afiliación previa al ISS, el posterior traslado al Régimen de Ahorro Individual y todo lo relacionado con el reconocimiento de la pensión de vejez a partir del 19 de septiembre de 2016, explicando que no le consta lo que tiene que ver con entidades ajenas a su entorno. Aclara que en su caso particular le brindó al demandante una asesoría amplia, correcta, clara, comprensible y suficiente sobre todos los aspectos del RAIS, así como las diferencias entre ambos regímenes pensionales. Se opuso además a las pretensiones ya que nos encontramos frente a un acto existente, válido y exento de vicios del consentimiento y el formulario de vinculación se suscribió de forma libre y voluntaria. Además, el demandante se encuentra pensionado por vejez desde el año 2014 lo que convalidó su consentimiento de

pertenecer a ese régimen. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir, buena fe, pago, compensación, prescripción y aprovechamiento indebido de los recursos públicos del sistema.

DEMANDA DE RECONVENCIÓN

Además de contestar la demanda como se acaba de indicar, PROTECCIÓN S.A. propuso demanda de **reconvencción** contra la señora BEATRIZ ELENA ROJAS RINCÓN pretendiendo que, en el evento de declararse la ineficacia de traslado solicitada, lo condene a reintegrar las sumas de dinero que se le han venido cancelando por concepto de pensión de vejez desde el mes de septiembre de 2016 y hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, junto la rentabilidad que ese dinero habría producido bajo su administración.

Al contestar la demanda de reconvencción, la señora BEATRIZ ELENA se opuso a lo pretendido por PROTECCIÓN S.A. manifestando que la ineficacia de la afiliación a esa entidad radica en la responsabilidad que tenía de proporcionarle una información completa y comprensible de su parte, lo que en este caso no ocurrió. Como excepciones propuso buena fe de la afiliada, mala fe de la entidad y falta al deber de información.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Mediante sentencia del 12 de noviembre de 2020, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín ABSOLVIÓ a las demandadas de las pretensiones formuladas en su contra ante la imposibilidad de declarar la ineficacia de traslado cuando se trata de una persona con la calidad de pensionada. Adicionalmente, ABSOLVIÓ a la demandante de la pretensión planteada mediante demanda de reconvencción por PROTECCIÓN S.A. CONDENÓ en costas a la demandante en la suma de \$100.000 a favor de cada una de las demandadas.

Conoce la Sala del asunto por **CONSULTA** a favor de la demandante

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

En esta instancia, una vez surtido el traslado respectivo, la apoderada de COLPENSIONES presentó alegatos de conclusión a través de los cuales solicita se confirme la sentencia de primera instancia.

C O N S I D E R A C I O N E S:

Antes de abordar el estudio de la sentencia de primera instancia por virtud del grado jurisdiccional de CONSULTA concedido a favor de la demandante, relacionados principalmente con la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional con fundamento en la indebida información suministrada cuando optó por afiliarse al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, conviene señalar que las siguientes situaciones fácticas están claras a esta altura del proceso:

- 1.- Que la señora BEATRIZ ELENA ROJAS RINCÓN nació el 6 de septiembre de 1960;
- 2.- Su afiliación inicial al otrora INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES se produjo el 24 de abril de 1979 y en esa entidad acumuló un total de 852.14 semanas de cotización;
- 3.- A partir del mes octubre de 1995 comenzó a realizar cotizaciones al RAIS, administrado por la AFP PROTECCIÓN S.A., en virtud de la suscripción del formulario de traslado el 15 de septiembre de ese mismo año.
- 4.- La señora ROJAS RINCÓN gestionó y efectivamente obtuvo la pensión de vejez según comunicación del 1 de septiembre de 2016 bajo la modalidad de retiro programado por cuenta de la AFP PROTECCIÓN

S.A., reconocida y pagada con retroactividad desde el 1 de agosto de 2016 en cuantía para ese año de \$894.263.

Si bien es cierto, en principio este Tribunal a través de sus distintas Salas de Decisión Laboral ha declarado consistentemente la ineficacia del traslado del RPM al RAIS, cuando los Fondos Privados no logran acreditar el cumplimiento de su deber legal de información integral, clara e idónea, ello se ha dado cuando de **afiliados** al sistema se trata, en la medida en que su situación no ha mutado al nuevo estatus de **pensionado**, pues este último tránsito supone - en el caso de los fondos privados cuando el interesado opta por una determinada modalidad pensional - la celebración de un nuevo acto jurídico subjetivo, diverso del primero, cuyos efectos sobrevinientes no deberían verse afectados por la presunta ilegitimidad del acto primigenio, jurídicamente independiente de este último. El afiliado ha franqueado la línea que la separa de estatus, convirtiéndose en pensionado, lo que lo sitúa en la categoría de beneficiario de un derecho adquirido bajo las normas que rigen su nueva condición, sin que en este caso pueda aducirse - ni se alega en este evento - una nueva ineficacia de la solicitud de pensionamiento.

En sentencia unificada dictada por la Sala Especializada Laboral de este Tribunal el día 14 de agosto del año 2019¹, por mayoría de sus integrantes se aprobó la decisión, relacionada íntimamente con el caso que ahora concentra la atención de esta Sala de Decisión, en el sentido de deslindar las 2 categorías anteriores. Así, luego de enunciar la evolución jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema de la ineficacia del traslado de régimen en general, especialmente en el sentido de que el juez debe, ciertamente, constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico, y bien, que le incumbe a las

¹LUIS ALFONSO GALVIS TORRES contra COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS; la ACP COLPENSIONES y COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A., RUN 05001-31-05-007-2015-01295-01. M. P. Dr. ORLANDO GALLO ISAZA

AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, se señaló en el fallo que se cita lo siguiente²:

“Este universo fáctico descrito por la Corte no incluye a los pensionados, pues aunque una de las sentencias fundadoras de esta línea trató de un pensionado que se trasladó a PORVENIR, se trata de un caso disanalógico, no inscrito en el precedente, por cuanto se trataba de una persona expresamente excluida del régimen de ahorro individual, al tener más de 55 años a la entrada en vigencia del sistema de seguridad social integral, estando inmerso en el contenido del ordinal b) del artículo 61 de la Ley 100 de 1993.

(...)

Viene a colación la referencia al consecuencialismo, porque resultaría posible darle continuidad a lo razonado por la Sala Laboral de la Corte para declarar la ineficacia de los traslados al RAIS en el caso de los afiliados y hacerlo extensivo a quienes ya se han pensionado en los fondos privados. Probablemente necesitaría un menor esfuerzo argumentativo plegarse a las razones de nuestro tribunal de cierre y seguir fallando en cascada idénticamente los casos de afiliados y de pensionados.

*Pero las calidades de **afiliado y pensionado** ya han sido deslindadas por la Corte Constitucional, precisamente en un fallo con un claro enfoque consecuencialista. Al examinar la exequibilidad del art. 107 de la Ley 100/93, que limitaba la posibilidad de los pensionados de trasladarse entre administradoras, la Corte arguyó lo que se esbozará enseguida. Esta es la disposición:*

² Advirtiendo que tal sentencia se dictó con sujeción al art. 35 del CGP, según el cual: “A solicitud del magistrado sustanciador, la Sala plena especializada o única podrá decidir los Recursos de Apelación interpuestos contra autos o sentencias, cuando se trate de asuntos de trascendencia nacional, o se requiera unificar la jurisprudencia o establecer un precedente judicial”. Norma que se entiende en concordancia con el art.10 inciso final del Acuerdo N° PCSJA17-10715, por el cual se establecen las reglas generales para el funcionamiento de los T.S. del Distrito Judicial. Lo anterior para significar que no es posible a las Salas de Decisión, separarse de dicho antecedente.

Art. 107. CAMBIO DE PLAN DE CAPITALIZACIÓN O DE PENSIONES Y DE ENTIDADES ADMINISTRADORAS. Todo afiliado al régimen y que no haya adquirido la calidad de pensionado, podrá transferir voluntariamente el valor de su cuenta individual de ahorro pensional a otro plan de capitalización o de pensiones autorizado, o trasladarse a otra entidad administradora.

El Tribunal constitucional profirió la sentencia C-841 de 2003, en la cual abordó dos problemas jurídicos, a saber:

1. ¿Es contrario al principio de igualdad que se permita a los afiliados, pero no a los pensionados, trasladarse entre administradoras de pensiones?
2. ¿Vulnera el derecho a la seguridad social de los pensionados que se les impida escoger la entidad administradora de pensiones o plan de capitalización que les resulte mejor administrativa o financieramente, siendo ya pensionados?

La Corte, ante la acusación de que la norma contenía un trato discriminatorio, realizó el correspondiente test de igualdad, entendiendo que:

“...la Constitución atribuyó al legislador la función de configurar el sistema de pensiones, y le otorgó un margen amplio para hacerlo, a fin de garantizar que el sistema cuente con los “medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante,” y su prestación se haga de conformidad con los principios de universalidad, eficiencia y solidaridad, conforme al artículo 48 de la Carta.”

Encontró además que los fines perseguidos por el legislador eran legítimos e importantes, en tanto,

“Tal como se señaló anteriormente, el art. 107 de la Ley 100/93 busca alcanzar al menos 2 fines claramente identificables: (i) garantizar un servicio administrativo y financiero eficiente de los recursos del régimen de pensiones de ahorro individual con solidaridad; y (ii) asegurar la estabilidad financiera y la rentabilidad de las inversiones de la entidad administradora o aseguradora.

Estos dos fines están estrechamente ligados a los fines constitucionales de eficiencia, universalidad y solidaridad

que orientan la prestación y ampliación de la cobertura de la seguridad social, en general, y del sistema general de pensiones, en particular. Por ello, garantizar un servicio administrativo y financiero eficiente y asegurar la estabilidad y la sostenibilidad del sistema, constituyen fines legítimos y constitucionalmente importantes en un Estado Social de Derecho como el colombiano.

Halló también que el medio elegido por el legislador resultaba idóneo para el logro de los fines perseguidos, pues,

“Permitir el traslado de una entidad administradora de pensiones a otra, una vez se ha adquirido la calidad de pensionado puede poner en riesgo la sostenibilidad del sistema, aumentar los costos de los servicios administrativos y financieros, y desestimar la obtención de mayores niveles de rentabilidad a través de inversiones de mediano y largo plazo, dado que la posibilidad de traslado quedaría sujeta al capricho del pensionado.

La pregunta que lógicamente ha de plantearse este Tribunal es si la prohibición de movilidad para pensionados que el legislador estableció y la Corte Constitucional prohijó, en el caso citado para trasegar dentro del régimen de ahorro individual, no tendrá aún mayor entidad para los asuntos como en el de la ineficacia, donde la orden que finalmente contienen nuestras sentencias es la de inscribir al demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Esto es, mutar su régimen pensional.

La prohibición de traslado para quienes les faltaren menos de 10 años para pensionarse, introducida en la ley 100 por el art. 2º de la Ley 797/03, también fue avalada por la Corte Constitucional en la sentencia C-1024 de 2004, con consideraciones que si bien se referían a una norma posterior, reafirman la pertinencia de esas limitaciones a la movilidad entre regímenes. Como en el caso de la C-841 de 2003, la norma aquí demandada también superó el test de proporcionalidad y abundaron en ella motivaciones claramente consecuencialistas. Este párrafo abunda en estas últimas:

“Desde esta perspectiva, si dicho régimen se sostiene sobre las cotizaciones efectivamente realizadas en la vida laboral de los afiliados, para que una vez cumplidos los requisitos de

edad y número de semanas, puedan obtener una pensión mínima independientemente de las sumas efectivamente cotizadas. Permitir que una persona próxima a la edad de pensionarse se beneficie y resulte subsidiada por las cotizaciones de los demás, resulta contrario no sólo al concepto constitucional de equidad (C.P. art. 95), sino también al principio de eficiencia pensional, cuyo propósito consiste en: "obtener la mejor utilización económica de los recursos administrativos y financieros disponibles para asegurar el reconocimiento y pago en forma adecuada, oportuna y suficiente de los beneficios a que da derecho la seguridad social. Este principio en materia pensional se manifiesta en el logro de la sostenibilidad financiera autónoma del sistema integral de seguridad social en pensiones, en aras de garantizar 'el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales', en los términos previstos en el artículo 53 del Texto Superior"

(...)

Es plausible que la diferenciación de las calidades de afiliado y pensionado a partir de los argumentos que se han expuesto y de toda la legislación que claramente los diferencia, verbi gratia, los arts. 13, literales b), e) y d), 87, 115 y 117 de la Ley 100/93, permita apartarse del precedente de la Sala Laboral de la Corte sobre ineficacia de la afiliación, entendiendo que se está ante universo fáctico diverso cuando se trata de ciudadanos que ya se han pensionado.

(...)

Por último, ha de reiterarse por esta Sala que sostener la tesis de la ineficacia de la afiliación para pensionados del régimen de ahorro individual es un camino que puede conducir a situaciones del todo insostenibles, por cuanto la consolidación de ese nuevo estatus supone en muchos casos la participación de terceros de buena fe, como cuando se ha optado por pensionarse bajo la modalidad de renta vitalicia y se ha contratado con una aseguradora su pago. Las palabras de la Corte Constitucional, en la mentada sentencia C-841 de 2003, acuden con autoridad para esclarecer ese reductio ad absurdum :

"(...)

Valga también mencionar además las situaciones de quienes se han pensionado anticipadamente y han negociado su bono pensional antes de la fecha de redención normal. Ese tercero inversionista que se ha beneficiado en el mercado de valores, mediante un negocio totalmente legítimo, querrá una respuesta cuando la justicia laboral disponga la anulación de esa transacción.

Estos sería solo dos ejemplos del impacto que en el mundo real tendría declarar la ineficacia de la afiliación de quienes ya se han pensionado en el régimen de ahorro individual. Impacto que responsablemente esta Sala quiere evitar, decidiendo mediante esta sentencia de unificación que no podrá declararse la ineficacia ni la nulidad de su afiliación."

Así mismo, en providencia del 3 de septiembre de 2019, esta misma Sala Primera de Decisión, con ponencia del mismo Magistrado Hugo Alexander Bedoya Díaz, se pronunció así:

"Se podría agregar por esta Sala Primera en las implicaciones jurídicas consecuencialistas, que si sólo se mira el traslado inicial y la libertad informada del afiliado sin tener en cuenta el nuevo acto jurídico que reconoce la pensión solicitada de manera libre y voluntaria y sin señalar ninguna inconformidad antes de adquirirla, sería como mantener una obligación irredimible y eterna, entendida como el poder de no permitir la extinción de las obligaciones, a través de medios válidos, como un acto jurídico nuevo, por ello estos actos no pueden, ni deben depender de la voluntad exclusiva del acreedor o del deudor, quienes, como en este caso, varios años después del reconocimiento de la pensión, podrían alegar que el acto de afiliación o traslado inicial del sistema pensional, es ineficaz y que debe entonces trasladarse al otro régimen, es decir, la ineficacia traspasaría el nuevo acto o negocio jurídico y otros contratos colindantes, como retrotraer contratos jurídicos con 3os de buena fe, lo que implica eventuales demandas de las AFP y aseguradoras para deshacer la pensión de invalidez y sobrevivientes que fueron entregadas a un usuario, bajo un acto ineficaz, al igual que las demandas de reconvención para que se devuelva los pagado y ya gastado por el pensionado. En

cuanto al Bono Pensional pagado se deberá retornar el mismo al ministerio. ¿Qué pasará con los pensionados anticipadamente, que negocian el Bono Pensional antes de fecha de redención normal? ¿Se deberá incluir a la litis a los inversionistas que pagan el Bono Pensional? Y quien asume la diferencia entre lo entregado al fondo por el inversionista y los pagado por el Ministerio, etc.

En conclusión habrá de entenderse que sí existió un nuevo acto jurídico que genera el estatus de pensionado y en el que no existió un vicio del consentimiento pues se realizó a partir de la pensión rogada, se garantizó que el sujeto ha expresado voluntaria y libremente su intención de participar en el acto jurídico o contrato para el reconocimiento de la pensión de vejez, después de haber comprendido la información de los requisitos requeridos para adquirirla, los beneficiarios, la tasa de reemplazo, el capital que ahorro, la modalidad de la pensión que adquirirá y quien la pagará, etc, no se podría hablar del concepto de ineficacia, pues como se vió, la línea jurisprudencial de la corte hace imprescriptible esta figura jurídica pero “porque lo que se busca es materializar el acceso a la pensión de vejez”. Ello implica que si ya se dio la pensión de vejez en el RAIS, los vicios del acto anterior de afiliación dejan de operar, por existir un nuevo acuerdo entre las partes y lo que podría alegarse a partir de este nuevo acto sería una nulidad absoluta o relativa, donde la carga de la prueba corresponde a la parte demandante, y ya este sería un acto prescriptible y saneable.”

Criterio que ha sido acogido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia gracias a que respecto a la situación objeto de discusión ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse en sentencias como la SL 373 del 10 de febrero de 2021, Rad. 84475, la SL 3707 del 18 de agosto de 2021, rad. 86706, la SL 1113 de 2021 o más recientemente la SL 2176 del 24 de mayo de 2022 en las que indicó:

“... si bien esta Sala ha sostenido que por regla general cuando se declara la ineficacia de la afiliación es posible volver al mismo estado en que las cosas se hallarían de no haber existido el acto

de traslado (vuelta al statu quo ante)³, lo cierto es que la calidad de pensionado es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un estatus jurídico, que no es razonable revertir o retrotraer, como ocurre en este caso. No se puede borrar la calidad de pensionado sin más, porque ello daría lugar a disfuncionalidades que afectaría a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas, y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema en su conjunto.

(...)

... de acuerdo con lo expuesto, la Corte abandona el criterio sentado en la sentencia CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989, respecto a la invalidación del traslado de un régimen a otro cuando quien demanda es un pensionado."

En esas condiciones y por las razones vistas en esta providencia, sin que sea necesario abundar en razones, la decisión de primera instancia en cuanto negó la pretensión de ineficacia de traslado de régimen pensional, deberá ser confirmada.

Sin costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, el día 12 de noviembre de 2020.

Sin costas en esta instancia.

Notifíquese por EDICTO.

³ SL1688-2019, SL3464-2019

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **bb3fd1491a13ac886feb651d6dc8298c6faf8bfec37ba7623acf7141434e0c0d**

Documento generado en 23/02/2023 03:53:38 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>